

Chile | Descontento con las pensiones y política fiscal

Hermann Esteban González

[Diario electrónico El Mostrador \(elmostrador.cl/mercados\)](http://elmostrador.cl/mercados)

Tres marchas con el eslogan “No más AFP” parecen ser la muestra más clara de que hay una parte de la población que está descontenta con sus pensiones, o más bien con el sistema de capitalización individual que existe en Chile hace 35 años. Las tasas de reemplazo parecen no dejar conformes a un gran número de trabajadores, especialmente cuando comparan su pensión con lo que ganaban al final de su vida activa y esto los ha llevado a manifestarse contra el sistema.

Si bien entiendo y comparto esta preocupación, me pregunto si esta es prioritaria o no y una forma de saberlo es viendo lo que dicen las encuestas de opinión. Si tomamos la encuesta trimestral de la Universidad de Chile que permite que las personas señalen libremente cuál es el mayor problema que enfrentan, por lejos la opción más citada es la seguridad ciudadana, seguida por la educación, la falta de empleo y la salud. ¿Las pensiones? No, las pensiones no aparecen en este listado. Con una metodología distinta, la encuesta CEP arroja, como los temas que deberían ser prioridad, la delincuencia, el desarrollo económico y, nuevamente, las oportunidades de empleo y la salud. ¿Las pensiones? Sí aparecen, pero solo en el sexto lugar.

Las encuestas pueden estar equivocadas y las pensiones quizás sí son un tema prioritario para las personas, eso no lo descarto. Pero la otra opción es que el desconocimiento del sistema y los abusos cometidos, hayan generado un caldo de cultivo propicio para la aparición de líderes populistas que han aprovechado esta situación para atacar a una industria. Lo preocupante es que estas manifestaciones gatillaron una respuesta de política pública que posiblemente no habría ocurrido sin ellas.

El sistema y los cambios necesarios

No se puede desconocer el éxito del sistema vigente desde el punto de vista de su contribución a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento. La evidencia empírica disponible muestra que la reforma al sistema de pensiones ha sido un factor clave para el crecimiento económico en las últimas tres décadas; por su parte, las mediciones internacionales ubican al sistema chileno como uno de los mejores desde el punto de vista de su contribución a la sostenibilidad fiscal y las cifras dan cuenta que este ha dado muy buenos retornos a sus aportantes.

Sin embargo, todo lo anterior parece no ser suficiente para darle legitimidad al sistema y es necesario hacer ajustes para enfrentar grandes cambios que se están produciendo, como el envejecimiento de la población y las bajas tasas de interés que prevalecen desde la crisis internacional de 2008-2009 y que probablemente se mantendrán por mucho tiempo.

Dados estos cambios, las propuestas que apuntan a aumentar el ahorro individual van en la dirección correcta. Es necesario, aumentar la tasa de cotización, sería conveniente vincular de forma automática la edad de jubilación de hombres y mujeres a sus expectativas de vida; avanzar hacia la cotización obligatoria de los trabajadores independientes; entregar mayores incentivos para el ahorro voluntario y generar mecanismos para reducir la informalidad del empleo y reducir las lagunas previsionales.

Pero más allá de los ajustes paramétricos que se pueden y se deben hacer, ciertamente es más factible tener mayores tasas de ahorro en una economía que crece más, porque el crecimiento económico es clave para la creación de empleos formales y asalariados, así como para el aumento de las remuneraciones. Recuperar mayores tasas de crecimiento es fundamental no solo para dar sostenibilidad al sistema de capitalización individual, sino también para financiar un pilar solidario más benevolente.

Los efectos fiscales de la reforma que viene

No toda la solución al descontento con las pensiones pasa por un mayor ahorro individual. También existe consenso en que se debe fortalecer el pilar solidario y la forma de hacerlo es dentro del marco del presupuesto de cada año, de la regla fiscal y financiarlo con ingresos generales de la nación. Esto requerirá necesariamente priorizar las demandas ciudadanas. Eliminar programas mal evaluados, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y preguntarnos, por ejemplo, si queremos seguir avanzando hacia la gratuidad completa en educación superior o renunciar parcialmente a ella y financiar un pilar solidario más generoso.

La otra dimensión a considerar corresponde al rol del Estado como empleador, ya que cualquier cambio que se haga al sistema de pensiones significará mayores gastos en remuneraciones para el gobierno. Es el caso por ejemplo de los cinco puntos adicionales de mayor tasa de cotización que se ha propuesto y que costarían del orden de US\$ 1.500 millones al fisco, a lo que se suma la obligatoriedad de cotización de los trabajadores independientes que suman cerca de 50 mil en el sector público. La gradualidad en la aplicación de estas medidas u otras con impacto fiscal es clave para poder acomodarlas dentro de los espacios presupuestarios que pudiesen surgir, sin generar una presión excesiva sobre las finanzas públicas.

Tercero, está el uso de los fondos soberanos que algunos han propuesto para aumentar el gasto en pensiones. Sin embargo, esa no es una solución, dada la regla fiscal que opera en Chile desde el año 2001. Cualquier llamado a usarlos para financiar mayor gasto es una recomendación irresponsable, es un llamado a no cumplir la regla fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, las reglas de acumulación y desacumulación de estos fondos son temas que deben estudiarse y discutirse en detalle.

La inacción de los gobiernos y de la industria es responsable de la situación que enfrentamos hoy en materia de pensiones. Hacia delante, junto con los cambios paramétricos que se discuten, será fundamental aumentar el ahorro privado, pero también será necesario un esfuerzo fiscal. Sin embargo, seguramente esta no será la última presión por mayor gasto que enfrentarán los gobiernos y, en este sentido, pienso que es necesario priorizar, evitar seguir haciendo políticas públicas por la presión de la calle y dar nuevos pasos para fortalecer la institucionalidad fiscal.